



**NACIONALISMO,
POPULISMO Y
RÉGIMEN DE
ACUMULACIÓN EN
BOLIVIA**

Hacia una caracterización del
gobierno de Evo Morales

Lorgio Orellana Aillón

N° 11

La Paz, marzo de 2006

ÍNDICE

La restauración oligárquica en Bolivia	2
Patrón de acumulación en Bolivia	5
Régimen de acumulación en Bolivia	7
Proposiciones sobre la crisis política boliviana	12
Caracterización del movimiento social y político de los últimos cinco años	16
El devenir electoral del MAS	22
Naturaleza del gobierno de Evo Morales	24
El populismo del MAS	28
Perspectivas del nuevo gobierno	30
Bibliografía	33

NACIONALISMO, POPULISMO Y RÉGIMEN DE ACUMULACIÓN EN BOLIVIA

HACIA UNA CARACTERIZACIÓN DEL GOBIERNO DE EVO MORALES

Lorgio Orellana Aillón*

...he aprendido que el presidente del gobierno tiene que hacer buenos negocios para su país. Por eso es importante discutir, analizar profundamente las políticas comerciales, sea el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercosur o el Tratado de Libre Comercio (TLC), hay que discutirlos. Si son mercados para los micro y pequeños empresarios, para las empresas comunitarias, asociaciones o cooperativas, si se garantiza en ese mercado, bienvenido, porque se trata de garantizar mercado para los pobres...

Evo Morales Aima,

Discurso de Investidura Presidencial en el Congreso Nacional.

La posesión de mando del “primer Presidente indígena de Bolivia” ha generado innumerables expectativas y adhesiones de intelectuales, activistas, escritores, dirigentes de organizaciones populares y artistas progresistas en la región. Muchos caracterizan el proceso boliviano como una revolución democrática. Los más entusiastas han llegado a decir que los dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) son revolucionarios que van por la misma senda del Che Guevara, mientras que otros profetizan el advenimiento del Pachakuti, el tiempo en que el mundo se pondrá al revés y que los indios subirán al poder. La sintonía de este conjunto de apreciaciones con la ideología del nuevo gobierno es por demás evidente. Recientemente, el vicepresidente Álvaro García Linera sostuvo, frente a los dirigentes de la

* Sociólogo y economista, es investigador del CEDLA de Bolivia y doctorante por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París.

El autor agradece a los miembros del Equipo de Investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) y a Tania Aillón, cuyas sugerencias y comentarios ayudaron a enriquecer y clarificar el planteamiento de las hipótesis centrales de este ensayo.

Central Obrera Regional de El Alto, la idea de que el MAS había protagonizado una revolución más profunda que la de 1952, pues ahora el actor principal es el movimiento indígena¹.

Aunque el estudio de la apología es útil cuando se busca comprender las visiones y los valores que legitiman a un gobierno, lo es menos cuando se intenta una explicación substancial del proceso. Para ello, necesitamos descender desde la superficie de la política boliviana, que es donde las opiniones sobre el MAS han tendido a distraerse, hacia el frío y lúgubre terreno de la anatomía de la sociedad moderna, como aconsejaba Marx. A nuestro modo de ver, es en la relación de los nuevos gobernantes con las estructuras e instituciones básicas del poder capitalista, donde se podrá dilucidar su orientación política.

La restauración oligárquica en Bolivia

Según Alexis de Toqueville, para explicar la Revolución Francesa debían de estudiarse las mutaciones profundas operadas dentro del *ancien régime*. Aunque los cambios que acontecen en Bolivia son incomparables con una transformación radical de alcance universal como aquella revolución, el planteamiento de Toqueville es útil para desarrollar algunas hipótesis sobre el nuevo gobierno de Evo Morales. Este es el criterio que guía el siguiente rodeo histórico por el “antiguo régimen” boliviano.

En su clásico ensayo *El desarrollo del capitalismo en América Latina*, Agustín Cueva definió la etapa oligárquica como “aquella fase caracterizada por el predominio de los ‘junkers’ locales y la burguesía ‘compradora’, en alianza con el capital monopólico, ubicado fundamentalmente en los sectores de la actividad primario-exportadora” (Cueva 1982: 144). Si para varios países latinoamericanos este período fue la primera fase del desarrollo capitalista en sus economías, Bolivia jamás conoció una etapa distinta a la oligárquica.

Mientras las políticas desarrollistas de la posguerra, en países como México, Brasil, Argentina o Uruguay, consolidaron el tránsito desde un patrón primario exportador hacia economías básicamente industriales, las condiciones del enclave minero y las particularidades del agro boliviano, sumido hasta 1952 en relaciones de tipo feudal, imposibilitaron el cambio

en la histórica modalidad de acumulación del capital de la economía boliviana; vale decir, su inserción en el mundo como exportadora de minerales e hidrocarburos. Bolivia vivió históricamente “encapsulada” dentro de la fase oligárquica definida por Cueva.

Ello, ineludiblemente, tuvo serias repercusiones en la constitución del poder político, en la formación del Estado y en las posibilidades de su democratización capitalista. La Revolución de 1952 fue “una revolución democrático burguesa abortada” (Cueva 1982: 196). La restauración oligárquica vino de la mano de las dictaduras militares y de la “recolonización” de la economía boliviana por el imperialismo norteamericano. Ciertamente, estos procesos comenzaron en las postrimerías de 1952 (la fundición del estaño siguió dependiendo de la empresa William Harvey del oligarca Simón I. Patiño) y continuaron con el Plan Trienal de préstamos condicionados por Alemania, Japón y Estados Unidos, que derivó en la posterior subordinación de la estatal Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) bajo el dominio del Banco Interamericano de Desarrollo; sin embargo, fueron las dictaduras militares las que crearon las condiciones políticas para “el alumbramiento de la nueva rosca²” (Almaraz 1988).

El proyecto del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de construir un Estado y una burguesía nacionales, 12 años después de la revolución, desembocó en el alumbramiento de una nueva oligarquía capitalista, gestada por los propios gobiernos del MNR; una nueva clase que nació durante la dictadura militar de René Barrientos de 1964 (Cfr. Almaraz 1988) y se nutrió de la dictadura de Banzer en los años 70 (Cfr. Grebe 1983). Haciendo una retrospectiva histórica, el partido nacionalista que proclamó la alianza de clases contra el imperialismo, devino en uno de los propulsores principales de los intereses de las empresas transnacionales y del capital financiero internacional. La llamada minería mediana y la agroindustria cruceña emergieron y se expandieron fuertemente vinculadas a los créditos e inversiones extranjeros.

El incipiente desarrollo del mercado interno y de la industria son resultados ínfimos comparados con el drenaje del excedente minero, canalizado por el Estado hacia las nuevas fracciones capitalistas, interesadas en generar ganancias a partir de la comercialización de materias primas. La restauración oligárquica llevó al poder a una burguesía subordinada al

capital financiero internacional, junto al cual controló los principales negocios privados del comercio, la banca y la producción de minerales en Bolivia (Cfr. De La Cueva 1983: 286).

No obstante que estos empresarios acumularon capital bajo el amparo del Estado nacionalista, su posición intermediaria, comercial y su fuerte vinculación con las empresas transnacionales, los orientaron desde fines de los años 70 hacia el neoliberalismo (Lavaud 1990: 251). En efecto, fue desde fines de los años 70 que localmente las confederaciones empresariales empezaron a propugnar abiertamente una reforma neoliberal del Estado y la economía. El tiempo comprendido entre 1978 y 1985 es definido, de modo apologético por Mansilla, como “el período heroico”, pues en él se desarrolló la encarnizada lucha de las confederaciones empresariales contra “el estatismo y el populismo” (Mansilla 1994: 113-166).

Aquel proceso llegó a su cima durante el gobierno del MNR y de Acción Democrática Nacionalista (ADN), que en 1985 inauguró la era neoliberal en Bolivia. La mayoría de estos nuevos gobernantes era, en palabras de Lavaud, “representantes directos de intereses privados, propietarios o accionistas de negocios importantes, o responsables de asociaciones patronales” (1990: 279). De modo festivo, Mansilla evoca ese momento como “la revolución liberal de 1985”.

El triunfo de los empresarios debe entenderse como la cima de un ciclo político que empezó a gestarse en las mismas entrañas del Estado nacionalista, por la forma en que éste distribuyó el excedente económico; vio la luz con el “alumbramiento de la nueva rosca” hacia mediados de los años 60; inició una fase ascendente durante la dictadura de Banzer; alcanzó la cúspide a partir de la promulgación de la Nueva Política Económica en 1985 y su madurez durante las reformas neoliberales de “segunda generación” del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, a mediados de los 90. “No hay duda (escribe Mansilla) de que con la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, el empresariado privado alcanzó la porción más suculenta de poder político y, por lo tanto, una excelente oportunidad para poner en práctica muchas de sus concepciones” (Mansilla 1994: 194).

No puede entenderse la naturaleza, menos aún la orientación de la reforma neoliberal del Estado y la economía, iniciada en 1985 y profundizada en los 90, al margen de la estrecha vinculación entre los empresarios, los consorcios multinacionales, las “agencias de cooperación” y una renovada generación de funcionarios estatales dirigida por militantes del MNR y de ADN. Esta es la estructura íntima que explica lo que en Bolivia vino a denominarse el “modelo neoliberal”, el “sistema político” y la “democracia pactada”. El “juego democrático” consistió en la rotación de distintos gobernantes que no sólo respetaban sino que reforzaban, legitimaban y expandían una estructura básica de poder: la coalición de burócratas y empresarios fuertemente vinculados al negocio de las empresas transnacionales. Ha sido, por definición, una oligarquía capitalista que ha detentado el poder del Estado y que tuvo en el “sistema de partidos políticos” su modo principal de reproducción política.

Resulta por demás paradójico que los legados de la “revolución inconclusa” del MNR fueran precisamente la constitución de otro régimen oligárquico —una “nueva rosca” aliada al imperialismo—, la enajenación de los recursos naturales a manos de las empresas transnacionales en los 90, el desmantelamiento del débil tejido industrial existente hasta 1985 y el fortalecimiento de una economía centrada en la producción y exportación de materias primas; es decir, una suerte de “eterno retorno” hacia la etapa oligárquica.

Patrón de acumulación en Bolivia

Los elementos aportados hasta aquí nos sirven para identificar una dinámica del desarrollo capitalista en Bolivia que, lejos de haber sido transformada, fue continuada por el Estado nacionalista. La restauración oligárquica evidencia que la histórica modalidad del desarrollo capitalista en Bolivia, es decir el patrón de acumulación, no cambió substancialmente. Si partimos del criterio de que un patrón de acumulación se determina a partir de las formas de subordinación de la economía local por el capital monopolista, la articulación interna entre los diversos sectores económicos de la producción social y las especificidades de la reproducción del capital que estas relaciones determinan (Cfr. Valenzuela 1990: 65), convendremos entonces que en Bolivia el patrón centrado en la producción y exportación de materias primas no se transformó en su contrario.

El sector capitalista dominante, que históricamente ha subordinado bajo su lógica de acumulación a los otros segmentos de la producción —capitalistas y no capitalistas— y que ha mediado la subsunción de la economía boliviana en el capital monopolista, ha sido el sector productor de materias primas. Desde mediados del siglo XIX hasta la fecha, lo fundamental del excedente capitalista se generó en los enclaves mineros de plata y de estaño; en los complejos de caucho, castaña y soya; en los yacimientos de petróleo y de gas; producción que estuvo básicamente dirigida hacia el mercado mundial y controlada por el capital monopolista. En Bolivia, la “etapa oligárquica” no fue una *fase* del desarrollo capitalista, sino que fue *el* desarrollo del capitalismo.

Estas condiciones materiales posibilitaron la existencia de las fracciones locales de la clase dominante, la supeditación del Estado al imperialismo y su debilidad institucional, la pequeñez y fragmentación del mercado interno, la inextricable amalgama entre la dominación clasista y la dominación racial y, por tanto, la ideología señorial y oligárquica de sus clases dominantes, verdadera constante en la historia de Bolivia (Zavaleta 1986). Empezando por las divisiones regionales y raciales, pasando por la cíclica lucha de las clases y grupos oprimidos contra el capital monopolista, hasta el enfrentamiento contra los *k'aras* por la tierra y contra la opresión étnico-cultural, que afloran en los tiempos de crisis, tienen en aquellas condiciones su posibilidad histórica, es decir, constituyeron la determinación estructural de la esfera política (Cfr. Evers 1989: 13).

Las grandes crisis políticas en Bolivia, como la Guerra Federal de 1899, la Revolución Nacional de 1952, la llamada crisis del Estado nacionalista de los 80 y la “Guerra del Gas” de 2003, son acontecimientos históricos que anuncian la consolidación o el derrumbe de proyectos oligárquicos de articulación de la economía primario exportadora boliviana al comercio internacional. Tales acontecimientos indican cambios substanciales dentro del patrón primario exportador, como el tránsito de la era de la plata a la del estaño, entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, de la explotación privada a la explotación estatal de los recursos naturales entre los años 30 y los años 50, la penetración directa del capital monopolista entre los años 60 y los años 80, hasta el tránsito desde la era minera a la de los hidrocarburos entre

los 90 y el año 2000. Estas mutaciones estuvieron relacionadas con la recomposición de las fracciones de clase en el poder, cuando no con profundas transformaciones de la estructura del Estado y de las clases sociales.

Durante aquellas crisis se definieron los destinos del poder de las oligarquías locales y de las formas de inserción del país en la economía mundial; pero también de proyectos políticos indios, proletarios y populares de cambio radical, como la rebelión de Zárata Willka, ahogada militarmente por los liberales a fines del siglo XIX (Condarco Morales 1966); la perspectiva de la revolución proletaria en 1952, derrotada durante los gobiernos del MNR (Justo 1975); las insurrecciones y revueltas obreras de inicios de los años 80, derrotadas finalmente por la nueva oligarquía en 1986 o las rebeliones populares de inicios de este milenio contra las transnacionales y los gobiernos oligárquicos, cuyo desenlace todavía no está dicho.

Las crisis políticas fueron el retorno cíclico de los antagonismos immanentes a la modalidad específica del desarrollo capitalista en Bolivia. Fueron luchas donde la rebelión de los grupos sociales oprimidos y explotados de la sociedad, pusieron en cuestión el destino del poder político, el control sobre los recursos naturales y la distribución del excedente económico, así como los valores y principios ideológicos dominantes de la época. Fueron crisis de hegemonía, pero también crisis de las posibilidades de acumulación de capital en el marco de las instituciones políticas existentes; fue el desencadenamiento de los antagonismos históricos de la formación social boliviana, que ya no podían ser resueltos dentro de las estructuras de poder imperantes; conflictos de larga data que impulsaron la transformación de las instituciones estatales vigentes.

Régimen de acumulación en Bolivia

Lo anterior nos conduce a la necesidad de desarrollar un criterio de periodización que ayude a explicar los modos de regulación y de estabilización de los antagonismos económicos y sociales de la historia larga del patrón de acumulación en Bolivia, identificando el conjunto de agencias, estructuras de poder y funciones estatales que garantizaron la reproducción ampliada del capital monopolista en Bolivia, durante determinados períodos históricos.

Nuestro punto de partida en torno al proceso de “restauración oligárquica”, además de permitirnos identificar la modalidad específica de acumulación de capital durante el siglo XX, nos proporciona algunos elementos substanciales, útiles para bosquejar un principio de reproducción y de estructuración del poder socio-político, es decir, para identificar un conjunto de relaciones relativamente estables que posibilitaron la “reproducción-ampliada” de la dominación socio-política en Bolivia durante períodos históricos específicos. Recordemos que la estructura básica de poder, resultante de la restauración oligárquica, estaba constituida por una particular articulación entre el poder económico y el Estado, relación sobre cuyo concepto requerimos reflexionar.

Acordaremos que el Estado capitalista no es un instrumento inerte de la burguesía, es decir, un órgano sin grado alguno de autonomía, incapaz de generar iniciativas propias. Sin embargo, menos aún se trata de una entidad neutral e independiente de las relaciones de poder económico. El Estado es una institución clasista, estructuralmente relacionada con la acumulación de capital (Cfr. Borón 2003). De ahí que sea necesario volver a pensar el concepto de la estructura de esta relación.

Giovanni Arrighi ha propuesto la noción de régimen de acumulación a escala mundial, inspirándose en la opinión de Fernand Braudel sobre la relación que vincula la formación y la reproducción ampliada del capitalismo a los procesos de formación de los Estados. Braudel contempla el capitalismo como un proceso absolutamente dependiente del poder del Estado en su emergencia y expansión: “El capitalismo (escribe Braudel) tan sólo triunfa cuando llega a identificarse con el Estado, *cuando es el Estado.*” (citado por Arrighi 1999: 25). Esta noción no busca anular la especificidad del Estado como entidad social distinta del capital, sino que propone una concepción sobre la forma en que ambas esferas sociales se relacionan. Partiendo de esta idea, para Arrighi, un régimen de acumulación es el conjunto de estrategias y estructuras mediante las que un conjunto de agencias gubernamentales y empresariales particulares, promueven, organizan y regulan la expansión o la reestructuración de la economía-mundo capitalista (Arrighi 1999: 23).

Los regímenes de acumulación están gobernados por coaliciones de gerentes estatales y empresarios que impulsan la reestructuración de los Estados y la economía capitalista, en la búsqueda de poder y de beneficios; por “elites de poder” en el sentido de Mills (1957: 12), que se sitúan en la cúspide del poder económico y político. Dichos regímenes son “bloques históricos”, según la definición de Gramsci, pero que, además de cimentar ideológicamente la supremacía de un grupo social sobre el resto de la sociedad, funcionalizan las instituciones y las políticas estatales a los requerimientos de la acumulación ampliada de capital. En síntesis, *un régimen de acumulación es la estructura de poder y la hegemonía que se constituyen alrededor de las funciones específicas del Estado en la reproducción del capital.*

Para situar esta concepción en Bolivia, cabe introducir la distinción entre “regímenes de acumulación imperial” y “regímenes de acumulación periféricos”. El objeto de estudio de Arrighi son regímenes de acumulación como el inglés o el norteamericano; en consecuencia, su asunto corresponde a la primera categoría, mientras que las referencias aportadas sobre la restauración oligárquica en Bolivia corresponden a lo que podríamos denominar un régimen de acumulación periférico.

Según estos criterios, en Bolivia podemos identificar, de modo provisional, al menos tres ciclos históricos de regímenes periféricos de acumulación. El primero fue el ciclo del “superestado minero” dirigido por los “barones del estaño” y la “rosca minera”, una capa de abogados y profesionales de la gran minería que fungían como gobernantes, viabilizaban los negocios de los “barones del estaño” mediante una política liberal irrestricta, fomentaban la expansión de los latifundios y, en períodos de efervescencia social, protegían estos intereses mediante la represión de las rebeliones indias y obreras. Los puestos de mando en el gobierno eran destinados a una pequeña minoría criollo-mestiza, pues la gran masa indígena era proscrita de los procesos electorales. Tal régimen estuvo cohesionado por una ideología señorial, darwinista y por la xenofilia de sus clases dirigentes. Esta época se inició en el ciclo de la plata, durante las últimas décadas del siglo XIX, alcanzó la cima con el ascenso del Partido Liberal al poder después de la Guerra Federal de 1899, inició su declive durante el proceso de la Guerra del Chaco de inicios de los años 30 y terminó con la Revolución de 1952.

El segundo ciclo fue regido por los gerentes del Estado nacionalista, que controlaron y dirigieron el proceso productivo a través de empresas estatales como la COMIBOL y Yacimientos Petrolíferos y Fiscales Bolivianos (YPFB), entre las más importantes, e intervinieron en el proceso de reproducción de capital mediante políticas desarrollistas. La legitimidad del Estado nacionalista se sustentó en reformas de corte nacionalista y redistributivo, como la estatización de la gran minería y la Reforma Agraria, pero también en la mediación de los sindicatos de obreros, de campesinos y de clases medias como canales legítimos de expresión de las demandas sociales frente al Estado. El nacionalismo y el populismo fueron las expresiones ideológicas de dicho período. Este ciclo se inició a fines de los años 30, en el tiempo del denominado “socialismo militar”, alcanzó la cúspide durante la Revolución de 1952, inició su declive durante la dictadura militar de mediados de los años 60, para concluir a mediados de los años 80 del siglo XX.

El último ciclo fue el del Estado oligárquico neoliberal, dirigido por una oligarquía financiera subordinada a las empresas transnacionales y al capital financiero internacional (Cfr. De la Cueva 1983). Se caracterizó por la apertura irrestricta al comercio internacional, la expansión del capital monopolista en la economía boliviana, la privatización de los recursos naturales y los servicios públicos. Este proceso estuvo regulado por una política monetarista y administrada por gerentes estatales, representantes directos del mundo de los negocios.

No obstante que las dictaduras militares impulsaron la primera fase de este ciclo, la época tuvo como rasgo predominante la formación de gobiernos constitucionales a partir de alianzas postelectorales entre un conjunto de partidos políticos dirigidos por cúpulas empresariales. La ideología neoliberal fue el signo de dicha época. Este último ciclo se inició con el alumbramiento de “la nueva rosca” a mediados de los 60 (Cfr. Almaraz 1988), alcanzó la cima entre mediados de los 80 y mediados de los 90 y durante estos últimos años habríamos estado viviendo su crisis, es decir, presumiblemente, el tránsito hacia un nuevo régimen de acumulación.

Esta periodización no pretende ser exhaustiva, sino principalmente identificar los rasgos generales y las fases que caracterizaron aquellos períodos históricos. Tampoco se busca

establecer una relación necesaria entre régimen de acumulación y régimen político. Históricamente, distintas formas políticas gobernaron junto a las agencias empresariales un mismo régimen de acumulación, lo cual, sin negar que los distintos gobiernos se articularan de diferentes maneras a las mismas estructuras de poder, nos informa sobre las pervivencias políticas que transitaron entre uno y otro régimen de acumulación.

Lo anterior indica que en Bolivia los regímenes de acumulación fueron formas cualitativamente diferentes, pero a la vez similares de regulación y estabilización de las contradicciones sociales, inmanentes al peculiar desarrollo del capitalismo; formas substancialmente distintas pero también parecidas de dominio socio-político dentro de la histórica modalidad de acumulación de capital, basada en la producción y exportación de materias primas; “diferenciaciones dentro de una unidad”, hubiera dicho Marx (2001: 20). El fondo oligárquico fue, ciertamente, una de las “constantes estructurales” fundamentales que trascendió el paso de un régimen de acumulación a otro.

Desde esa perspectiva, en Bolivia los regímenes de acumulación fueron modos específicos de regulación del patrón de acumulación primario exportador; formas particulares de estabilización de sus contradicciones. Parafraseando a Michel Aglietta (1997: 13), un régimen de acumulación es un principio de reproducción del patrón primario exportador, que a su vez es una condición de transformación del propio régimen, relación dialéctica que constituye un factor explicativo del mantenimiento, pero también de la ruina histórica de las estructuras de poder y las hegemonías, que se constituyeron en torno a las funciones específicas del Estado en el proceso de reproducción del capital.

La elaboración de una hipótesis convincente sobre la naturaleza del nuevo gobierno de Evo Morales y de sus perspectivas, requiere el desarrollo de algunas proposiciones explicativas sobre la crisis política boliviana de los últimos años, incorporando aquella dialéctica histórica: la relación entre los procesos de corta duración, que en este ensayo hemos denominado regímenes de acumulación, en procesos de más larga duración como los patrones de acumulación. Se trata de la interrelación entre las formas y las funciones específicas que

adquieren las instituciones del Estado y las fases por las que atraviesa la histórica modalidad de acumulación de capital en Bolivia.

Proposiciones sobre la crisis política boliviana

Para René Zavaleta Mercado (1986), la Revolución Nacional de 1952 fue un proceso en que el Estado capitalista conquistó su autonomía relativa. Mientras que el Estado oligárquico fue un dispositivo político directamente controlado por los abogados de los “barones del estaño”, por “la rosca”, el Estado nacionalista era relativamente autónomo respecto del imperialismo y del capital para formular sus políticas. Cambios como la nacionalización de las minas y la Reforma Agraria, fueron prácticamente impuestos por las masas de obreros y campesinos al nuevo gobierno, importantes indicadores de que el Estado ya no era el mero apéndice de los latifundistas y los grandes mineros desterrados del país por la Revolución. Ésta otorgó las bases iniciales para la constitución de una hegemonía capitalista moderna, fase embrionaria que, como dijera Cueva, concluiría abortada.

La restauración oligárquica post 52 será un proceso de contrarreforma y de drástica reducción de la autonomía relativa del Estado respecto de la clase dominante, impulsado por los mismos gobiernos del MNR y luego por las dictaduras militares, decurso que terminó consolidándose con el advenimiento del neoliberalismo. El nuevo Estado oligárquico neoliberal no se sustentó en la movilización, sino en la atomización y la represión de los elementos más activos de la sociedad civil: el proletariado minero, los sindicatos campesinos y las organizaciones populares.

Contrarreformas, como el Decreto Supremo 21060 de 1985 y la enajenación de las empresas del Estado en los 90, fueron impuestas por los gobiernos neoliberales con el consenso otorgado en las urnas y con la ayuda de la represión militar. La consolidación del Estado oligárquico neoliberal fue posibilitada por el drástico cambio en la correlación de fuerzas, desfavorable a los sectores sociales explotados y oprimidos de la sociedad boliviana, una nueva situación de las fuerzas de clase que será estabilizada institucionalmente y consagrada ideológicamente.

El proceso de “democratización” de los 80, que comúnmente se entendió en los espacios académicos y en el discurso oficial como la sustitución de los sindicatos y el Ejército por los partidos políticos como nuevos mediadores entre el Estado y la sociedad civil (Cfr. Mayorga 1991), es un eufemismo que obvia al menos tres cuestiones fundamentales: mientras que a través de los sindicatos, las masas populares ejercieron un poder relativo sobre el Estado nacionalista, el “sistema de partidos políticos” fue el mecanismo principal de reproducción del poder oligárquico en el Estado neoliberal y el Ejército devino en el “garante del sistema democrático”, es decir, el garante de esta nueva estructura de poder. Por tanto, la “nueva mediación” básicamente consagró la alienación del régimen político respecto de las masas y su íntima imbricación con la nueva oligarquía capitalista.

Formalmente, en Bolivia se instauró un régimen político democrático desde inicios de los años 80. En la práctica, mientras que, por un lado, las organizaciones que antes posibilitaron una influencia directa de las clases populares en la toma de decisiones fueron debilitadas, por otro lado, desde 1985, la instauración de un régimen político presidencialista, subordinado a las “agencias de cooperación”, a las transnacionales y vinculado a los empresarios locales, configuraron una estructura controlada por minorías privilegiadas, legitimadas a través del procedimiento electoral y protegidas por el brazo armado. La “oligarquización” del poder implicó la drástica reducción del universo democrático, no obstante las liturgias electorales que caracterizaron la época.

El presidencialismo boliviano devino en la dictadura del Poder Ejecutivo, sin ningún contrapeso político efectivo en la toma de decisiones sobre los problemas fundamentales del Estado y la economía. Ciertamente, éste fue el escenario más favorable para que las decisiones del sector privado y las transnacionales terminaran imponiéndose. Un régimen político fuertemente presidencialista, que gozaba de escasa oposición, fue altamente funcional a los negocios y a las inversiones extranjeras.

La privatización de las empresas del Estado en los 90 —la “capitalización” del MNR— fue paradigmática en este sentido. Es por demás significativo que los proyectos de ley de

capitalización fueran primero puestos a consideración de los posibles inversores extranjeros antes de ser aprobados por el Congreso. “Durante el gobierno del MNR (escribe Osvaldo Calle), las leyes en Bolivia se hicieron en consulta con las transnacionales” (Cfr. Calle 2001: 43).

La funcionalidad del Ejecutivo con los negocios de las empresas extranjeras, es ciertamente uno de los aspectos que permite explicar la hipertrofia del primero. A modo de referencia, señalemos que los 76 contratos de concesión de los yacimientos hidrocarburíferos firmados entre el gobierno de Sánchez de Lozada y las empresas transnacionales, a mediados de los 90, jamás fueron ratificados por el Congreso. El Ejecutivo fue la única instancia que avaló el ingreso del capital monopolista en el sector de hidrocarburos.

Este proceso indica mucho más que una mera usurpación de funciones. Señala la funcionalización inmediata del gobierno a lógicas básicamente privadas. Un dato ilustrativo es que en diciembre de 1994, Gonzalo Sánchez de Lozada y su canciller Antonio Aranibar, firmaron un Contrato de Asociación con la ENRON, formando una compañía para desarrollar, financiar, construir y operar el gasoducto Bolivia-Brasil. “Sánchez de Lozada (escribe Roberto Fernández) no tenía atribuciones para firmar un convenio de esta naturaleza, dado que YPFB era una empresa pública y no de su propiedad. Este contrato inconstitucional a todas luces, por sus características internacionales debía haber sido discutido y aprobado previamente por el Congreso boliviano.” (Fernández 2005: 15). Los jefes del Estado negociaron con la transnacional, disponiendo de aquel “bien público” como se dispone de un patrimonio privado.

La determinación inmediata que permite explicar la crisis de 2003, es la eliminación de la autonomía relativa del Estado respecto de la clase dominante. La invasión de la racionalidad económica capitalista en las instituciones del Estado rompe la propia lógica de funcionamiento de esta institución, su especificidad como órgano que garantiza la dominación política y promueve la obediencia de las clases subalternas, es decir, produce legitimidad. El Estado oligárquico en crisis no tenía margen alguno de negociación y maniobra para estabilizar los conflictos activados por las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la enajenación de los recursos naturales, menos aún para legitimar estos procesos.

La crisis de febrero de 2003 es altamente significativa al respecto. A principios de ese año, el gobierno se propuso reducir el elevado déficit fiscal, una exigencia del FMI para el desembolso de nuevos préstamos. La sugerencia de los asesores técnicos del gobierno de subir impuestos a las empresas petroleras, fue interpretada por el ministro de Hidrocarburos, Fernando Illanes, un connotado ex presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), como un imposible, una locura que dificultaría el negocio de la exportación de gas a California (Cfr. Shultz 2005: 25). ¿De qué otro modo podían pensar los ministros del área económica, antiguos empresarios y tecnócratas cuyos sueldos y gastos corrientes eran financiados por las “agencias de cooperación multilateral” y por las corporaciones privadas que explotan hidrocarburos en Bolivia? (Cfr Fernández 2005:7). En vez de aumentar el impuesto a las petroleras, para Sánchez de Lozada fue más razonable establecer un impuesto progresivo a los asalariados, a partir de quienes ganaban un haber superior a dos salarios mínimos vitales (poco más de 100 dólares).

Un día después de que el Ejecutivo enviara al Congreso el proyecto de ley de aplicación de impuesto a los salarios, multitudes de jóvenes trabajadores, estudiantes, comerciantes, lustrabotas, obreros de telefonía móvil, destruían varias oficinas del gobierno, de los partidos políticos, de varias empresas privadas y bancos. Al centro del tumulto, en la Plaza Murillo, sede de las oficinas del gobierno, se iniciaba un enfrentamiento armado entre el Ejército y la Policía, que aprovechó la convulsión para exigir aumento salarial.

Parfraseando a Habermas (1999), la crisis de febrero resulta de la colonización del pensamiento político por la racionalidad económica capitalista, ejemplarmente representada por la mentalidad del propio Sánchez de Lozada, quien, en palabras de su ex Ministro interino de Servicios y Obras Públicas, “manejaba el Estado como se maneja una empresa”³. Aplicar un impuesto a los salarios para reducir el déficit fiscal, cuya recaudación principal se obtendría de los asalariados más pobres (básicamente maestros, médicos, enfermeras, policías), era para estos empresarios en función de gobierno, un criterio más razonable que aquel de subir el impuesto a las petroleras, pues la *episteme* que gobernaba su razonamiento era la de minimizar costos para hacer del negocio del gas más atractivo a los ojos de los inversores extranjeros. El

desenlace sangriento de octubre de 2003 será el desencadenamiento de las tendencias reaccionarias inmanentes a esta concepción básicamente “monetarista” de la política, sintetizada acertadamente por Atilio Borón con la fórmula: “libertad para la iniciativa privada; opresión para el manejo de la cosa pública” (Borón 2003: 57).

Sánchez de Lozada estaba convencido que realizar cualquier consulta popular para definir el destino de la exportación del gas, sería una gran irresponsabilidad que podía poner en riesgo “la viabilidad del país”; esta era una cuestión complicada que sólo podía ser resuelta por técnicos y especialistas⁴. En el marco de esta comprensión de las cosas, incluso la realización de un referéndum para definir el destino de la exportación del gas boliviano fue vista como una verdadera “amenaza al orden”, pues tal consulta siempre encerraría la posibilidad del No, respuesta a la que un negocio de semejante magnitud como la exportación de gas natural a California no podía arriesgarse. El negocio estaría mejor garantizado mientras más secreta fuera la negociación, es decir, mientras menos validada socialmente fuera, menos legítima.

La crisis política se expresará, entonces, como una contradicción entre las funciones de legitimación y acumulación del Estado capitalista, pues la búsqueda de validación de las políticas del Estado, vía referéndum, ponía en riesgo el negocio de la exportación de los hidrocarburos, contradicción que los jefes del Estado buscarán resolver, finalmente, en octubre de 2003, por la vía armada, por la represión.

Caracterización del movimiento social y político de los últimos cinco años

Los elementos apuntados hasta aquí permiten inferir que las variables explicativas principales del movimiento social que se inicia con la Guerra del Agua, en abril de 2000, y que culmina en las jornadas de mayo y junio de 2005, deben ser rastreadas no únicamente en la estructura del “sistema político”; es decir, en la menor o mayor oportunidad política para movilizarse que ofrecen regímenes represivos o democráticos respectivamente (Cfr. Tilly 1978 y Tarrow 1994), sino en la estructura de poder y la hegemonía del régimen de acumulación. Desde la perspectiva que hemos venido desarrollando, la explicación fundamental se encuentra

en la reestructuración neoliberal del Estado capitalista de las últimas dos décadas, reestructuración que, para completar nuestras hipótesis, es necesario situar dentro del contexto de las transformaciones recientes del capitalismo contemporáneo.

Para este efecto, creemos útil recuperar una tesis originalmente hecha por Nicos Poulantzas sobre las relaciones entre Estado y clases sociales en el capitalismo contemporáneo (Poulantzas 1987), proposición retomada en debates actuales sobre las relaciones entre el capital transnacional y los Estados nacionales (Bieler y Morton 2003: 467). La idea original indica que los Estados nacionales han sido reestructurados en función de las necesidades de acumulación del capital transnacional. La denominada “globalización” no consiste en el funcionamiento del capital fuera de los límites de los Estados nacionales, como indica la literatura en boga, sino más bien en que el capital transnacional se reproduce y expande material e ideológicamente a través de una diversidad de Estados nacionales en el mundo.

Este, a nuestro modo de ver, es el contexto externo del desarrollo del Estado oligárquico neoliberal en Bolivia, la condición exterior de su recomposición en función de las necesidades de acumulación del capital transnacional. La dialéctica entre la expansión del capital monopolista en las últimas décadas, la reestructuración del Estado boliviano y la “oligarquización” del poder político, ha reconstituido el régimen político, reduciendo su autonomía relativa y obstaculizando las funciones estatales de legitimación. ¿Qué puede decirnos esta proposición sobre las insurrecciones populares de los últimos cinco años?

Un primer aspecto tiene que ver con las condiciones estructurales que posibilitaron las movilizaciones sociales de oposición a las políticas neoliberales de enajenación de los recursos naturales. No obstante su diversidad, los manifestantes de estas luchas procedían predominantemente de una matriz socio-económica específica: la lucha de los campesinos regantes del Valle Central de Cochabamba en las jornadas de abril de 2000 contra la expropiación de sus fuentes de agua promovida por la transnacional Bechtel; la movilización de las comunidades indígenas del Altiplano Norte de La Paz por tractores, créditos y contra la Ley

de Aguas en abril y septiembre de 2000; las luchas de los campesinos cocaleros del Trópico de Cochabamba y de los Yungas de La Paz contra la política de erradicación de los cultivos de coca, promovida por el gobierno norteamericano; la fuerte gravitación de las cooperativas mineras de Oruro y de Potosí, así como de las organizaciones gremiales y “microempresariales” de la ciudad de El Alto en acontecimientos como la “Guerra del Gas” de 2003 y de mayo- junio de 2005 por la “recuperación de los recursos naturales” y la “industrialización de los hidrocarburos”, indican que el origen económico-social de los combatientes en aquellos eventos históricos fueron mayoritariamente las pequeñas unidades económicas.

Puesto que el principio de oposición entre estos sectores sociales y el gobierno se desarrolló en torno a la política de privatización de los recursos naturales en favor de las empresas transnacionales y las condiciones de existencia de la pequeña unidad de producción (agua, tierra, coca, gas, tractores, créditos, contra los elevados impuestos), es factible proponer la hipótesis de que la condición macroestructural de la crisis política en Bolivia fue la contradicción entre las posibilidades del desarrollo de la pequeña unidad económica y la expansión del capital monopolista en Bolivia. Dicha contradicción, aunque no permite explicar integralmente el desenvolvimiento de la crisis, sí es útil para identificar su posibilidad histórica, la “masa crítica” que convirtió su “estallido” en una posibilidad real. Las políticas neoliberales proliferaron las pequeñas unidades económicas que, a su vez, devinieron en la condición de su propia negación.

Estas contradicciones de clase fueron ciertamente más que procesos materiales. Como sugiere Anthony Oberschall (1973), los intereses materiales no se expresan automáticamente en acciones de protesta, sino que son interpretados a partir de valores y criterios morales de justicia, que son los que justifican los actos de los manifestantes. Convencionalmente, en los espacios académicos se dijo que las ideologías fundamentales que orientaron las acciones de los insurrectos entre abril de 2000 y octubre de 2003, fueron de contenido étnico-cultural. Varios intelectuales indigenistas caracterizaron los conflictos de septiembre de 2000 en el Altiplano y

de octubre de 2003 como una “lucha de razas” entre los *k’aras*, que dirigen un Estado colonial y los indígenas (Patzí 2004, Mamani 2004, García 2003). Otras veces, se caracterizó este conflicto como una lucha entre naciones. Aunque ciertamente las reivindicaciones étnicas han sido un componente esencial de las movilizaciones de los últimos cinco años, ellas forman parte de un proceso ideológico en realidad más vasto y complejo.

Una investigación reciente en base a decenas de entrevistas, centenares de resoluciones e instructivos escritos de diversas organizaciones de la ciudad de El Alto, registros magnetofónicos y audiovisuales sobre la simbología y los discursos de los manifestantes de la Guerra del Gas⁵, nos han permitido constatar que sus alocuciones y consignas, las pancartas que muestran cuando marchan, los símbolos sagrados cuando entierran a sus muertos, sus canciones y estribillos, los discursos con los cuales justifican sus acciones al momento de hablar con los periodistas, en fin, los símbolos y la forma de representar sus acciones, son abrumadoramente patrióticos y bolivianistas.

Es altamente significativo el hecho de que la gran mayoría de los manifestantes alteños aymaras de octubre de 2003, en sus pancartas asocie el gas a ser exportado por un puerto chileno con la costa marítima perdida durante la Guerra del Pacífico de 1879 frente a Chile, represente la mortal represión desatada por el gobierno como “guerra”, denomine a sus muertos “mártires de la Guerra del Gas” y denuncie que “el gobierno nos quiere regalar a Chile y a Estados Unidos”. En centenares de registros magnetofónicos y audiovisuales, resoluciones escritas y decenas de entrevistas, los manifestantes aymaras justifican sus acciones indicando: “¡El gas es de Bolivia carajo!”, “Los gobernantes no son bolivianos”, “El gringo Goni debe irse a su país”, “Goni es un chileno”, “Goni es un traidor”, “Nuestra lucha es por Bolivia”.

La memoria larga que se actualiza en estas expresiones no es una evocación de los Willka ni de los Katari; es una evocación de la expoliación de los recursos naturales y del desmembramiento territorial del país. Si existe un “sentimiento” profundo que persevera en la memoria colectiva de amplias fracciones de las clases y capas populares en Bolivia, revitalizado

por la escuela primaria y por el servicio militar obligatorio, es el de haber sido objeto de despojo, de desmembramiento, de saqueo y de robo. No sólo que entre la fundación de la República en agosto de 1825 y los años 30 del siglo XX, Bolivia perdió más de la mitad de su territorio como producto de guerras y de tratados diplomáticos, sino que durante la Colonia y la fase oligárquica, vivió el vaciamiento de sus yacimientos de plata, estaño, petróleo y gas, y sus plantaciones de goma y de castaña, procesos incorporados en el bagaje cultural de amplios segmentos de los grupos sociales desposeídos de este país. Octubre de 2003 es ciertamente la reactualización de esta “memoria histórica del saqueo”, representación subjetiva de los oprimidos respecto de la histórica modalidad primario-exportadora de acumulación del capital en Bolivia y de las guerras que redujeron su territorio.

El movimiento de octubre y nos atreveríamos a afirmar que el de mayo y junio de 2005 también, fueron movilizaciones nacionalistas de los pobres por la “defensa del gas boliviano”, la “nacionalización de los hidrocarburos” y por “la recuperación de los recursos naturales”; es decir, luchas nacionalistas por la propiedad sobre los medios fundamentales de la producción hoy controlados por las compañías transnacionales. Desde esta óptica, fueron luchas anticapitalistas y antioligárquicas; enfrentamientos de la “nación oprimida” contra el imperialismo equiparables a las luchas de liberación nacional de los años 60 (Cfr. Prada 2004: 46).

Ciertamente, las reivindicaciones indígenas se hallan incorporadas dentro de esta movilización nacionalista, en el sentido de que lo indígena deviene en una parte constitutiva y esencial de “lo nacional”. Hoy en día, como dice Prada (2004: 46): “cuando se es indio se es más boliviano, cuando se es más boliviano se es más indio”. Sin embargo, no es lo indígena el horizonte desde el cual se visibiliza la cuestión nacional. Es al revés, lo nacional es la matriz significativa desde donde se piensa la problemática indígena, pues “lo nacional”, en la voz de los propios manifestantes aymaras, abarca cuestiones más vastas que la opresión racial, como la dominación imperialista, la expoliación de los recursos naturales y el “desarrollo del país”.

El enfrentamiento entre las transnacionales, las oligarquías locales y los grupos sociales explotados y oprimidos del país, al desarrollarse en torno a los fundamentos materiales e ideológicos del régimen de acumulación, devinieron en luchas por el poder del Estado y la hegemonía. Tal como escribiera Ralph Miliband sobre una época que para los profetas de la globalización se había felizmente terminado: “el Estado es aquello con lo cual los hombres tropiezan al enfrentarse con otros hombres” (Miliband 1997: 3). En Bolivia, tales enfrentamientos abrieron situaciones claramente revolucionarias, que terminaron quebrando una de las superestructuras básicas del poder oligárquico, el “sistema político”, así como los principios ideológicos de justificación del neoliberalismo; vale decir, la ideología que justifica la expansión del capital monopolista en Bolivia rota por la moral nacionalista de los últimos años.

Sinteticemos: la eliminación de la autonomía relativa del Estado respecto de las empresas transnacionales y las oligarquías capitalistas locales, activa una contradicción entre la expansión material e ideológica del capital monopolista en Bolivia y las antiguas formas de legitimación del Estado nacional. Parafraseando a Lavaud, la crisis deriva de las contradicciones entre las realidades de una “economía colonial” y las exigencias políticas de la soberanía (Lavaud 1990). El proceso de enajenación de los recursos naturales choca con la representación de comunidad política que tienen los grupos económico-sociales subordinados, cuya reproducción social se inserta en los marcos de la economía local (principalmente la pequeña unidad económica). La venta de los recursos naturales es socialmente percibida como *ilegítima*, “vende-patria” y atentatoria a la reproducción de sus condiciones de existencia. Este es el conjunto de mediaciones que unifican los polos de la contradicción entre la expansión del capital monopolista y las posibilidades del desarrollo de la pequeña unidad económica; es decir, que explican el que su desenvolvimiento haya devenido en una crisis del régimen de acumulación.

¿Cuál es el lugar del MAS dentro de esta contradicción entre los pequeños productores y las empresas transnacionales? ¿Cuál es su rol en la lucha política de los explotados por la soberanía política y contra la dominación imperialista? ¿El gobierno del MAS indica el

surgimiento de un nuevo régimen de acumulación? ¿Los resultados electorales de diciembre de 2005 anuncian el fin de la crisis política de los últimos años y la recuperación de la autonomía relativa del Estado? A partir del conjunto de hipótesis que hemos venido desarrollando, pensamos que es factible responder estas preguntas y explicar convincentemente la naturaleza del movimiento social y político dirigido por el MAS.

El devenir electoral del MAS

El Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, hoy denominado MAS, surgió como órgano político de un movimiento campesino de clase en el Trópico de Cochabamba, con una visión, una ideología y una simbología antiimperialista e indigenista, de oposición a las políticas de erradicación y penalización de los cultivos de coca, promovidas por el gobierno norteamericano, pero también con una visión de oposición a las políticas neoliberales implementadas en Bolivia desde 1985.

La evolución electoral del MAS, inicialmente marginal en 1997, es un proceso vinculado a la descomposición y crisis de los antiguos partidos políticos de la oligarquía y al ascenso de las luchas populares de los últimos cinco años contra las transnacionales y el neoliberalismo. La hazaña electoral de 2002, en la que el MAS alcanzó un segundo lugar en las elecciones generales, tiene como antecedente la “Guerra del Agua” de 2000, una insurrección popular contra la privatización del servicio del agua a ser administrada por la empresa “Aguas del Tunari”, subsidiaria de la transnacional Bechtel, y la “Guerra de la Coca” de enero de 2002 contra la prohibición de los mercados de la coca en Cochabamba, exigida por la embajada norteamericana. Estos procesos, además de expulsar a la transnacional y anular el decreto de prohibición de los mercados de la coca, respectivamente, fueron el golpe de gracia asestado al partido gobernante Acción Democrática Nacionalista (ADN) que, de haber ganado la primera mayoría en las elecciones generales de 1997, terminaría casi desapareciendo del escenario electoral en 2002.

Las elecciones generales de 2002 supondrán el “ensanchamiento” de la base social del MAS, de origen predominantemente campesino, incorporando a capas populares y clases medias urbanas. La gravitación del MAS en las esferas del Poder Legislativo y, fundamentalmente, la renovación de la composición social del movimiento, tendrán ciertamente un efecto en su orientación ideológica. Según la lectura de intelectuales del MAS como Filemón Escóbar, para seducir a las clases medias se debía disminuir la radicalidad del discurso.

La posición del MAS en momentos culminantes como la “Guerra del Gas” de octubre de 2003, en la que promovió como sucesor presidencial a Carlos Mesa, otrora vicepresidente de Sánchez de Lozada, su apoyo al nuevo gobierno del propio Mesa y, finalmente, la posición del MAS en las jornadas de mayo y junio de 2005, donde nuevamente defendió la sucesión constitucional mientras una insurrección nacional apuntaba hacia la “nacionalización sin indemnización” de los hidrocarburos, deben entenderse como el producto de un viraje ideológico y político, un proceso de conversión intelectual posibilitado por la presencia del MAS en el Poder Legislativo y por las modificaciones que se operaron en la composición social de las direcciones de esta organización.

La “defensa de la democracia” frente a los afanes golpistas de la derecha después de la insurrección de octubre, era una consigna que también inmiscuía la defensa del poder relativo que el MAS había adquirido dentro de las instituciones del Estado y expresaba los valores de nuevas capas sociales que habían ingresado al movimiento, que no precisamente emergían de la práctica de la acción directa, sino de círculos más bien intelectuales y académicos, cuya influencia será decisiva en la formación de una concepción política en el movimiento. Parafraseando a Marx (1981), a las reivindicaciones sociales de los campesinos cocaleros se les limó la punta antiimperialista y se les dio un giro democrático; a las exigencias democráticas de la pequeña burguesía se les despojó de la forma meramente institucional y se afiló su punta de protesta. Así nació el MAS como una opción parlamentaria y democrática de ascenso al gobierno, que combinaba la política legal con la acción directa en las calles.

El desplazamiento del MAS hacia la centro izquierda debe entenderse como un fenómeno básicamente sociológico. Es resultado del aumento del peso político de las clases medias urbanas dentro del movimiento. El devenir del MAS es la expresión de la dialéctica entre los campesinos y las pequeñas burguesías urbanas, entre un movimiento de clase antiimperialista y un movimiento de clases medias intelectuales básicamente democrático, unidad de contrarios que se halla sintetizada en la fórmula presidencial “Evo-Alvaro” y que en la posesión de mando Morales definiera como una “alianza entre la identidad cultural y la capacidad intelectual”.

Naturaleza del gobierno de Evo Morales

Los resultados electorales del 18 de diciembre de 2005 son un producto de lo que el MAS representa para el electorado nacionalista en el contexto de las luchas antiimperialistas de los últimos años, lo que el MAS significa para los electores que simpatizaron o participaron en las movilizaciones contra las empresas transnacionales contra los gobiernos oligárquicos, por la soberanía política y contra la opresión étnico-cultural. En el MAS se han depositado las expectativas de transformación de los grupos oprimidos de la sociedad; el MAS es *su* gobierno. Es decir, “el capital político” generado por más de cinco años de luchas populares contra las transnacionales y los gobiernos oligárquicos, ha sido “acumulado” por el gobierno de Evo Morales.

Mientras que los gobiernos neoliberales se sustentaron en la atomización de las luchas sociales, el nuevo gobierno ha emergido de la propia movilización social. Desde esta perspectiva, sería irreflexivo indicar que el MAS “es la misma cosa” que los neoliberales anteriores; sin embargo, tampoco estaría mejor ubicado quien dijera que los masistas son revolucionarios.

Los nuevos gobernantes del MAS comparten con sus oponentes neoliberales el mismo respeto por la propiedad privada y por las instituciones del Estado capitalista; como los gobiernos anteriores, pretenden incentivar la inversión extranjera, promover la “seguridad

jurídica” y trabajar en sociedad con las empresas transnacionales⁶. En una conferencia de prensa de enero de 2006, Evo Morales, junto al Presidente Kirchner de Argentina, fue enfático al respecto: “No sólo respetaremos la propiedad privada, la defenderemos”. El MAS comparte con los anteriores funcionarios del Estado el mismo respeto por las estructuras fundamentales del capitalismo.

A diferencia de los combatientes de las jornadas de mayo y junio de 2005 que peleaban por “la nacionalización sin indemnización” de los hidrocarburos —lo cual en El Alto significaba la expropiación de las compañías petroleras—, los “masistas” se proclaman defensores de la propiedad privada, los promotores de una “nacionalización responsable”⁷ que, como Evo Morales lo ha puesto de relieve en varias ocasiones, “no significa expropiación”.

¿Qué es entonces lo nuevo de este gobierno con relación a los neoliberales de antaño? Ciertamente, la composición de clase de su movimiento y de su dirección política, la orientación ideológica de sus propuestas y las reformas que se propone implementar. Para empezar, mientras que los dirigentes neoliberales representan los intereses del capital monopolista en la economía boliviana, el nuevo gobierno proviene de un espectro social distinto. El gabinete ministerial es la expresión política de una capa social particular, situada entre las clases populares que derribaron gobiernos neoliberales durante los últimos cinco años y las oligarquías locales articuladas al imperialismo. Una mirada a la declaración de fortunas de los actuales miembros del gabinete ministerial y del propio Presidente, puede ayudarnos a constatar que, si bien su extracción social es predominantemente campesina, minera, artesanal u otro origen humilde, en la mayoría de los casos su patrimonio actual asciende a una suma superior a los 50 mil dólares⁸, condición que los aproxima más a capas medias cuyo modo de vida es relativamente holgado en un país como Bolivia.

Si a ello sumamos la presencia de intelectuales de clases medias en las carteras ministeriales del área política, económica y de los viceministerios, por su composición social el nuevo gobierno es básicamente la expresión de las capas medias urbanas y rurales. Aunque el gabinete ministerial tiene en sus filas a dirigentes campesinos, artesanos o mineros,

mayormente éstos proceden de estratos relativamente privilegiados en relación a las clases subalternas del campo y la ciudad.

Por su condición social, creemos correcto caracterizar a los miembros del nuevo gobierno, predominantemente, como expresión de capas sociales de la pequeña burguesía, cuyos orígenes en muchos casos los asemejan a las clases sociales explotadas y oprimidas del campo y la ciudad, pero cuya condición social actual los diferencian considerablemente de ellas. Son estos aspectos los que, a nuestro juicio, permiten explicar la ideología clasista de su programa político.

El nuevo gobierno no sería el representante de un imponente movimiento popular si no interpelara ideológicamente, en su programa de reformas, a sectores más vastos que el de la pequeña burguesía, dándole a esta interpelación su propio sello de clase. Los sujetos sociales principales invocados por el programa masista son la “microempresa” y la “pequeña producción”⁹. Tanto la composición social así como el programa de esta organización política, expresan, a la vez que se dirigen, a esa gigantesca masa de productores de las pequeñas unidades de producción de la ciudad de El Alto, las cooperativas mineras de Potosí y Oruro, los campesinos, los gremiales y las comunidades indígenas; clases y grupos sociales oprimidos que han sido la base de las movilizaciones de los últimos cinco años y que se hallan simbólicamente representados por el gabinete ministerial del nuevo gobierno.

Ideológicamente, la noción de desarrollar un “capitalismo andino-amazónico”¹⁰, de industrializar el país y, en consecuencia, de fomentar una “burguesía andina y amazónica” —lo que en Bolivia equivaldría a decir una burguesía nacional—, se dirige hacia aquellas fracciones de clase. Tal consigna resignifica de modo capitalista, “nacional” e “indígena” las expectativas de una heterogeneidad de sectores medios, campesinos pobres, pequeños propietarios de las ciudades y comunidades indígenas, a quienes se busca fortalecer con la ayuda de un “Estado fuerte” llamado a redistribuir una mayor parte del excedente que hoy es controlado por las empresas transnacionales. La tesis del “capitalismo andino-amazónico” actualiza aquella antigua narrativa burguesa que promovía la transformación del pequeño productor en capitalista y la transformación de una sociedad de pequeños productores en una sociedad

capitalista, ideas ciertamente legitimadas por un fuerte discurso indigenista de identidad cultural, que se ha convertido en el distintivo de “lo nacional” y “lo popular” en Bolivia durante los últimos años.

El programa del MAS apunta a la industrialización de los recursos naturales, al desarrollo del mercado interno, a un cambio “del patrón de desarrollo” centrado en la producción y exportación de materias primas por otro centrado en productos industriales. Busca “acabar con el Estado colonial” y democratizarlo por medio de una Asamblea Constituyente, para generar igualdad jurídica entre los distintos grupos étnicos, sociales y conquistar la soberanía política¹¹.

La lucha indígena por la inclusión política y la “soberanía de los pueblos”, son ciertamente reivindicaciones democráticas incorporadas en el discurso del MAS y que en la letra recogen las aspiraciones de las movilizaciones nacionalistas y de reivindicación étnica-cultural de los últimos cinco años.

Mientras que los antiguos gobiernos neoliberales eran los administradores de un Estado oligárquico y antidemocrático, las reformas democráticas planteadas por los dirigentes del MAS buscan —sea ésta o no su intencionalidad— la creación de un Estado y una sociedad capitalista modernos. La tesis según la cual el nuevo gobierno propugna la democratización del Estado debe ser precisada, indicando que se trata, intencionadamente o no, de una democratización limitadamente *burguesa* del Estado; un esfuerzo por la instauración de la igualdad formal (la eliminación de la discriminación racial), por la ciudadanía de los indígenas, es decir, su inclusión política, por la expansión del mercado interno, el desarrollo del capitalismo y por la instauración de una democracia liberal y representativa hasta hoy inexistente en Bolivia, pese a las liturgias electorales de los últimos 24 años.

No obstante sus propias particularidades, mística y ritualismo indígena, a partir de las referencias que hemos ido aportando, pensamos que es correcto caracterizar al nuevo gobierno como un movimiento social y político reformista de carácter democrático burgués, que se desarrolla en la era del capitalismo monopolista y de la dominación imperialista, contexto que

es a la vez su condición de posibilidad, pero también el límite de su propio desarrollo. Es su condición de posibilidad pues la efervescencia social que posibilitó el ascenso al gobierno de Evo Morales, fueron las luchas antiimperialistas encaradas por las clases y capas populares del país durante los últimos cinco años, emergentes de la contradicción entre la proliferación de la pequeña unidad económica y la expansión del capital monopolista en Bolivia. Es el principal obstáculo pues el Gobierno de Evo Morales se ha propuesto desarrollar la pequeña producción y reconstruir la soberanía nacional colaborando con el imperialismo, es decir, con la propia negación del desarrollo nacional y de las posibilidades de una burguesía andino-amazónica.

El populismo del MAS

Los elementos aportados indican que el programa ideológico y de reformas propuesto por el MAS hacen de él una opción más inofensiva que el populismo de los años 50. Mientras que el nacionalismo del 52 propugnaba una alianza de clases contra el imperialismo y “la rosca”, los nuevos gobernantes del MAS empezaron su gestión pidiendo el respaldo financiero de la “comunidad internacional” y el beneplácito de la oligarquía cruceña, para cuyas exportaciones ofrece nuevos mercados en China y Venezuela. Atrás quedó la época en la que el MAS promovía la ocupación de tierras en los latifundios del Oriente boliviano.

Morales inicia su gobierno planteando una franca sociedad entre el Estado, los pequeños, los grandes propietarios locales y las empresas transnacionales. En ello consiste su “nuevo patrón de desarrollo”, en el que “las relaciones entre empresa estatal, privada nacional y extranjera, así como las asociaciones de productores del campo y la ciudad, se conciben como complementarias (...)”¹². La diferencia principal con la “alianza de clases” del MNR del 52, es que la “complementaridad” invocada por el MAS incluye a la “empresa extranjera”. Los nuevos gobernantes son prisioneros de aquella antigua ilusión populista de que se puede gobernar para los pobres sin perjudicar a los ricos.

No obstante el largo siglo que los separa, los ideólogos del “capitalismo andino” llevan el mismo signo de aquellas clases medias reformistas, enfrentadas al Estado oligárquico

latinoamericano de principios del siglo XX, de quienes Cueva dijera: “La influencia de tales capas suple, en gran medida, la debilidad o ausencia de un proyecto industrializador proveniente de la fracción burguesa correspondiente, pero lo hace con las mismas vacilaciones y limitaciones de dicha fracción, o sea, con igual temor de resquebrajar el principal mecanismo establecido de acumulación” (Cueva 1982: 162).

Como en el caso de los gobiernos anteriores, la inversión de las empresas extranjeras y la “ayuda de la comunidad internacional”, es decir las agencias del capital financiero transnacional, son ciertamente esenciales en la visión de los nuevos gobernantes del MAS¹³. Los constructores del “nuevo Estado” no sólo comparten con los antiguos gerentes del Estado oligárquico la misma actitud con relación a las estructuras fundamentales del capitalismo (defensa de la propiedad privada, fomento a las inversiones, seguridad jurídica, etc.), sino también en relación con ciertas instituciones y principios sagrados del neoliberalismo, como el respeto a la estabilidad macroeconómica, control del déficit fiscal, bajos salarios, control de la inflación, mantener la apertura irrestricta de la economía al comercio exterior, incluida la posibilidad de que el nuevo gobierno firme el ingreso al TLC, según declaraciones del propio Evo Morales¹⁴.

Las diferencias ideológicas existentes entre el MNR y el MAS ciertamente se sustentan en condiciones objetivas distintas. Mientras que el gobierno del MNR subió al poder como producto de una revolución social, es decir, una transformación radical de la estructura del Estado y de las clases sociales, el MAS subió al gobierno en 2006 sin haber derrocado al antiguo poder oligárquico, que pervive en las estructuras del Estado y controla, junto a las “agencias de cooperación” y las transnacionales, las palancas fundamentales de la economía. Pero además, mientras que la revolución de 1952 derrocó a la “rosca” y expropió a los grandes empresarios mineros, la “revolución democrática” del MAS consiste en buscar una convivencia pacífica con el antiguo poder.

Así, las condiciones objetivas y subjetivas de este movimiento reformista para llevar adelante tareas democrático-burguesas, son más desventajosas que las existentes en 1952. En los marcos del capitalismo, las posibilidades de la concretización de un proyecto reformista de

corte democrático en Bolivia, son menores que las de un aborto histórico igual o peor al que devino la Revolución Nacional de 1952, es decir, hacia un franco proceso de restauración oligárquica dentro de la misma estructura del Estado y a la frustración de las tareas democráticas.

El ascenso del nuevo gobierno, entonces, no indica un cambio de régimen de acumulación, sino la renovación de gerentes estatales que ahora procuran revisar las funciones regulatorias y redistributivas del Estado en el proceso de reproducción del capital monopolista, situado en el sector primario exportador; sin transformar estas funciones ni las bases económico-sociales en que se fundamentan: el control privado y transnacional sobre las principales condiciones objetivas de la producción.

Perspectivas del nuevo gobierno

Finalmente, requerimos situar la victoria del MAS en el contexto de la crisis política de los últimos años y plantear algunos posibles escenarios sobre las perspectivas del antiguo régimen de acumulación en Bolivia. Dada la composición social, ideología, la base social del nuevo gobierno, así como el programa de reformas que se propone realizar, es razonable pensar, como en algún momento lo hiciera René Zavaleta Mercado en relación al Estado del 52, que este movimiento posibilite la recuperación de la autonomía relativa del Estado respecto del imperialismo y la oligarquía, resolviendo la crisis política de los últimos años; es decir, la contradicción entre las funciones de legitimación y acumulación del Estado capitalista. Ello, en efecto, no sólo podrá sustentarse en las liturgias políticas que han caracterizado al MAS desde su ascenso al gobierno, sino en un programa serio de reformas que redistribuyan el excedente económico.

La cooptación de dirigentes populares en cargos ministeriales, como es el caso de los dirigentes de las juntas vecinales de El Alto, de la Federación de Cooperativas Míneras, del sindicato de fabriles, además del decisivo control del MAS en las organizaciones campesinas e indígenas del país, indican la probabilidad de la formación de organizaciones populares y sindicatos paraestatales, que se constituirían en el sostén fundamental del nuevo gobierno y la

base de su legitimidad. La perdurabilidad de este proceso, nuevamente, sólo sería posible si el reformismo del MAS es suficiente como para resolver los problemas materiales concretos de estos sectores; básicamente, las condiciones de reproducción de la pequeña unidad económica.

La contradicción principal que se plantea desde la perspectiva de la recomposición del Estado, es una lucha por el poder entre el nuevo gobierno, que apunta a reformar el Estado tomando el control de la Asamblea Constituyente de agosto, y la oligarquía, que pugna por restablecer su antiguo dominio transfiriendo las palancas principales del poder a las prefecturas, que han sido ocupadas por las antiguas fuerzas conservadoras. Esta es una lucha básicamente entre la reforma y la conservación del antiguo poder.

Una de las posibles resoluciones de esta lucha puede definirse por la constitución de un nuevo “pacto social”, entre la antigua oligarquía, el imperialismo y una nueva burocracia estatal que, a la vez de garantizar la “paz social”, no inviabilizaría la lógica de acumulación imperante hasta la fecha. Dicha alternativa no rompería con el régimen de acumulación imperante, sino que daría oxígeno al ya existente, al realizar ciertas reformas “nacionalistas” que redistribuyan el excedente económico proveniente de la explotación de los hidrocarburos y consoliden la adhesión de las masas al nuevo gobierno por un tiempo más largo a los lapsos políticos que hemos conocido durante los últimos años. Esto, aunque en el mediano plazo posibilitaría una relativa estabilidad política, en el largo plazo podría ser una de las vías de la restauración oligárquica, como sucedió con los gobiernos del MNR post 52.

La otra posibilidad es que las bases sociales del MAS recuperen su independencia política y presionen a su gobierno y sus direcciones progubernamentales, hacia la realización de reformas cada vez más profundas, como la expropiación de la tierra y de los yacimientos de hidrocarburos a los latifundistas y a las transnacionales, respectivamente. Tales exigencias están presentes en el Movimiento sin Tierra (MST) y en las organizaciones populares de la ciudad de El Alto, a través de la demanda de “nacionalización sin indemnización”, por ejemplo.

La actualización de una opción radical produciría fisuras cada vez más grandes dentro del MAS, precipitando al nuevo gobierno en la disyuntiva de un enfrentamiento abierto y

directo con la oligarquía y el imperialismo o la represión del ala más radical del movimiento, proceso que podría reactivar la crisis del actual régimen de acumulación y plantearía nuevamente la posibilidad de su transformación. De la forma en que se resuelvan estas contradicciones entre la oligarquía, el imperialismo, el nuevo gobierno del MAS y las masas populares, dependerá el destino del antiguo régimen de acumulación y del poder político en Bolivia.

Las alternativas históricas oscilan entre prolongar la agonía del antiguo régimen de acumulación o impulsar el surgimiento de uno nuevo, que emergería a partir del control y la propiedad estatal efectivos sobre los yacimientos hidrocarburíferos, los latifundios, los yacimientos mineralógicos y la banca. Mientras el nuevo gobierno garantice el control privado y transnacional de estas condiciones objetivas de la producción, permaneceremos en una etapa intermedia entre lo viejo, que no acaba de perecer, y lo nuevo, que aún no acaba de nacer; una variante de “economía social de mercado” que, si bien plantea un cierto revisionismo en relación a la “ortodoxia neoliberal” acompañada de un discurso que sentencia la sepultura del neoliberalismo, en la práctica no termina de romper con ella.

Bibliografía

- Aglietta, Michel, *Régulation et crises du capitalisme*, Paris: Jacob, 1997.
- Almaraz Paz, Sergio, *Réquiem para una República*, La Paz: Editorial Los Amigos del Libro, 1988.
- Arrigí, Giovanni., *El largo siglo XX*, Madrid: Ediciones Akal, 1999.
- Bieler, Andreas y Morton, Adam David, “Globalisation, the state and class struggle: a ‘Critical Economy’ engagement with Open Marxism” en *British of Politics and International Relations*, Vol. 5 N° 4, November 2003, pp. 467-499.
- Borón, Atilio, *Estado, capitalismo y democracia en América Latina*, Buenos Aires: CLACSO, 2003.
- Condarco, Morales Ramiro, *Zárata: El temible Willka*, La Paz: Talleres Gráficos Bolivianos, 1966.
- Cueva, Agustín, *El desarrollo del capitalismo en América Latina*, México, Siglo XXI Editores, 1982.
- De la Cueva, J. M., *Bolivia: Imperialismo y Oligarquía*, La Paz: Ediciones ROALVA, 1983.
- Evers, Tilman, *El Estado en la periferia capitalista*, México: Siglo veintiuno editores, 5 edición.
- Fernández Terán, Roberto (Coord.), *Gas, Petróleo e Imperialismo Multinacional en Bolivia. (Una visión crítica del poder y su relación con las contribuciones petroleras 1985-2003)*, Cochabamba: CESU, Civil Society Budget Initiative (CSBI), 2005 (mimeo).
- García Linera, Álvaro, «El Alto, la ciudad donde germinó la insurrección popular», en *El juguete rabioso* N°90, 19 de octubre de 2003.
- Grebe, Horst, “El excedente sin acumulación: la génesis de la crisis económica actual”, en Zavaleta Mercado (Comp.) *Bolivia Hoy*, México: Siglo XXI Editores, 1983
- Justo, Liborio, *Bolivia: La revolución derrotada*, Buenos Aires: Juárez, 1975.
- Habermas, Jurgen, *Problemas de legitimación en el capitalismo tardío*, Madrid : Ediciones Cátedra, 1999.
- Lavaud Jean Pierre, *L'instabilité politique de l'Amérique Latine. Le cas de la Bolivie*, Paris : L'Harmattan, 1990.
- Mamani, Pablo, “El rugir de la multitud: Levantamiento de la ciudad aymara de El Alto y caída del gobierno de Sánchez de Lozada”, en *Revista OSAL*, N° 12, Buenos Aires: CLACSO, 2004.
- Mansilla, H.C.F., *La empresa privada boliviana y el proceso de democratización*, La Paz: Fundación Milenio, 1994.

Marx, Karl, “El 18 Brumario de Luis Bonaparte” en *Obras escogidas III*, Moscú: Editorial Progreso, 1981.

Marx, Karl, *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858,1*, México: Siglo veintiuno editores, 2001, 18 edición.

Mayorga, René Antonio, *Democratización y modernización del Estado en Bolivia*, La Paz: ILDIS, 1991

Miliband, Ralph, *El Estado en la sociedad capitalista*, México: Siglo veintiuno editores, 1997, 17 edición.

Mills, Wright, *La elite del poder*, México: Fondo de Cultura Económica, 1957.

Oberschall, Anthony, *Social conflict and social movements*, New Jersey: Prentice Hall, 1973.

Patzi Paco, Félix, “Rebelión indígena contra la colonialidad y la transnacionalización de la economía: triunfos y vicisitudes del movimiento indígena desde 2000 a 2003”, en *Ya es otro tiempo el presente. Cuatro momentos de insurgencia indígena*, La Paz: Muela del Diablo Editores, 2003.

Poulantzas, Nicos, *Las clases sociales en el capitalismo actual*, México: Siglo veintiuno editores, 1987, 9 edición.

Prada, Alcoreza Raúl, *Largo octubre*, La Paz: Plural, 2004.

Tarrow, Sidney, *Power in movement: social movements, collective action and politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Tilly, Charles, *From mobilization to revolution*, New York: McGraw-Hill, 1978.

Valenzuela, José C., *¿Qué es un patrón de acumulación?*, México: UNAM, 1990.

Sshultz, Jim, *Deadly consequences. The International Monetary Fund and Bolivia's “Black February”*, Cochabamba: The Democracy Center, 2005.

Zavaleta, Mercado René, *Lo nacional-popular en Bolivia*, México: Siglo veintiuno editores, 1986.

Material escrito y audiovisual consultado:

Jornada, Matutino de circulación nacional.

El Juguete Rabioso, Revista quincenal.

Le Monde Diplomatique, Edición boliviana.

MAS-IPSP, *Programa de Gobierno 2006-2010. Bolivia Digna, Soberana y Productiva para vivir bien*, La Paz, Corte Nacional Electoral (mimeo).

Actas de Declaración Informativa sobre el caso Octubre Negro, Ministerio Público de la Nación, Fiscalía General de la República, Sucre.

Our Brand is Crisis, Un documental de Rachel Boynton.

Para no perder la memoria, CD producido por Radio Pachamama, El Alto, 2004.

Archivos audiovisuales de canal 4-RTP, La Paz-Bolivia.

Archivos magnetofónicos de la Red ERBOL, La Paz-Bolivia.

Archivos de la Central Obrera Regional de El Alto.

Archivos de la Junta Vecinal de Santiago Segundo.

Entrevistas realizadas a dirigentes de juntas vecinales y de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto en abril de 2004 y octubre de 2005.

¹ Jornada, 2/II/2006.

² La rosca fue el denominativo con el cual se conoció a los abogados de la gran minería, que ejercían funciones de gobierno en el denominado “superestado minero”.

³ Acta de Declaración Informativa Prestada por Jose Volkmar Fernando Barragan Bauer, Ministro Interino de Servicios y Obras Publicas, Ministerio Publico de la Nación, Fiscalía General de la República ,Sucre, p. 16

⁴ “No, eso no, eso sería una irresponsabilidad [contestaba Sánchez de Losada a un periodista]. No puede pedirse que el pueblo decida una cosa tan compleja, tecnológica, económica, eso sería una injusticia” *Our Brand is Crisis*, Un documental de Rachel Boynton.

⁵ Datos provenientes de: Radio Pachamama, El Alto, 2004, CD « Para no perder la memoria »; Archivos audiovisuales de canal 4-RTP de La Paz; Archivos magnetofónicos de la Red ERBOL de Bolivia; Archivos de la Central Obrera Regional de El Alto; Archivos de la Junta Vecinal de Santiago Segundo; Entrevistas realizadas a dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales, en abril de 2004 y octubre de 2005.

⁶ MAS-IPSP, *Programa de Gobierno 2006-2010. Bolivia Digna, Soberana y Productiva para vivir bien*, La Paz, Corte Nacional Electoral, p. 17 (mimeo)

⁷ Cfr. MAS-IPSP, *Programa de Gobierno 2006-2010 op. Cit.*

⁸ Cfr. El Juguete Rabioso, Año 6, Número 147, del 12 al 26 de febrero de 2006, p. 13

⁹ MAS-IPSP, *Programa de Gobierno 2006-201*, op.cit., p. 6

¹⁰ Alvaro García Linera, El “capitalismo andino-amazónico”, en *Le Monde Diplomatique*, Edición boliviana, Enero de 2006

¹¹ Cfr. MAS-IPSP, *Programa de Gobierno 2006-2010*, op. Cit.

¹² Cfr. MAS-IPSP, *Programa de Gobierno 2006-2010*, op. Cit. p. 17

¹³ Ibid.

¹⁴ Cfr. Evo Morales Aima, *Discursos Presidenciales*, La Paz: Ministerio de la Presidencia, 2006